

Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTO:**

En los estos autos tramitados ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, rol C- 24730-2017 caratulados “Rivera Becerra Mónica y otro con Transporte CCU Ltda. y otro”, por sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve se acogió la excepción de cosa juzgada y se rechazó la acción, sin costas por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

La demandante dedujo recurso de casación en la forma y apeló de dicho fallo y una Sala de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, por sentencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, rechazó el recurso de nulidad y revocó la decisión solo en cuanto por ella se absolvió a la demandante del pago de las costas, y en su lugar, se decide que aquellas le quedan impuestas.

Contra esta última sentencia recurre la misma parte de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

**Y TENIENDO EN CONSIDERACIÓN:**

**Primero:** Que la recurrente sostiene que en la sentencia impugnada se han infringido los artículos 44, 2314, 2317, 2320 y 1698 del Código Civil; artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y artículos 2492, 2493 y 2509 del Código Civil y artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Sostuvo, en síntesis, que examinados los argumentos de atribución de responsabilidad se aprecia que en el primer juicio se imputa a las demandadas responsabilidad por mandar a un chofer sin preparación y con un permiso internacional para conducir, y en el presente proceso que el chofer guiaba el vehículo a una mayor velocidad que la permitida, ingresando a tomar la curva chocando contra la ladera del cerro, volcándose y causando la muerte de todos los ocupantes del móvil, imputando a las sociedades demandadas responsabilidad por el hecho ajeno, prevista en los artículos 2314 y 2320 del Código Civil.

Afirma que no se daría el tercer requisito de la cosa juzgada, la causa de pedir, incurriendo los sentenciadores en un yerro en la aplicación del artículo 177 del Código de Enjuiciamiento Civil, y ello influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que se acoge la excepción de cosa juzgada en circunstancias que debió ser rechazada y acogida la demanda, por encontrarse probada la responsabilidad del chofer del camión Jacob Osorio con el mérito del



informe SIAT, y del contratista Luis Cifuentes, empleador de Jacob Osorio y de las sociedades demandadas.

Expone que, además, no concurre los presupuestos de la institución de la prescripción, ya que entre los actores hay menores de edad y respecto de ellos existe la suspensión de la prescripción, por lo tanto eso ya denota una infracción de ley al acoger una excepción alegada de manera incompleta.

**Segundo:** Que para una acertada resolución del recurso de nulidad sustancial resulta conveniente dejar constancia de las siguientes actuaciones del proceso:

1.- Comparece Francisco Javier Hurtado Peñaloza, Abogado, en representación de María Guadalupe Vásquez Rojo, viuda de Erick David Esquivel Tapia por sí y en representación de sus hijos menores de edad, Jhon Mayckol, Jonathan Ignacio, Erick Evaristo, todos de apellido Esquivel Vásquez y en representación de Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera, Mónica María Rivera Becerra en su calidad de padres y hermanos de Alfredo Rivera Becerra, quien demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, en contra de la Sociedad Transportes CCU Limitada y de la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Limitada, solicitando se les declare responsables por el hecho ajeno, en el accidente ocurrido en la Ruta Antofagasta Taltal, a la altura de la denominada cuesta Paposo el 3 de noviembre de 2012, en el que fallecieron Erick David Esquivel Tapia y Alfredo Rivera Becerra, y se les condene al pago de las indemnizaciones solidariamente respecto de todos y cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses y costas.

Fundamentaron la demanda en el daño causado a los actores por el fallecimiento de Erick David Esquivel Tapia, quien era cónyuge y padre, respectivamente de los comparecientes y en el daño causado a los demandantes Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera y Mónica María Rivera Becerra, por el fallecimiento de Alfredo Rivera Becerra, quien era hijo y hermano, respectivamente, de éstos en el accidente ocurrido el día 3 de noviembre de 2012, cuando Erick David Esquivel Tapia, Alfredo Rivera Becerra y Jacob Andrés Osorio Torijano, trabajaban con el empresario transportista Luis Javier Cifuentes Aguirre, los dos primeros eran peonetas, es decir, encargados de la carga y reparto de las jabas de bebidas y cervezas de producción de la COMPAÑÍA DE CERVECERIAS UNIDAS, y el último era el conductor del



camión, el cual prestaba servicios de repartidor de cervezas y bebidas para la empresa CCU, circulando el día 3 de noviembre de 2012 en el camión marca Mercedes Benz, y saliendo desde la Planta de Compañía de Cervecerías Unidas S.A. CCU, en Antofagasta a Taltal, siendo conducido por Jacob Andrés Osorio Torijano con el objeto de entregar, despachar, distribuir, carga de bebidas y cervezas en Taltal, y al llegar al kilómetro 7, de la Ruta B-710, que une las localidades de Antofagasta y Taltal, la zona más peligrosa de esa ruta denominada cuesta Paposo, al enfrentar una curva en dicha ruta, el conductor del camión pierde el control de éste, se vuelca y por proyección choca con la ladera de cerro, falleciendo en el mismo lugar los tres ocupantes del camión.

Agrega que el informe técnico N°82 A-2012 de la SIAT de Carabineros indica que el móvil era conducido por la calzada de la Ruta B-710, en dirección al sur poniente, a una velocidad calculada en no inferior a 107 k/h, la cual es estimada no razonable ni prudente, dada la configuración del diseño vial, con pendiente prolongada y curvas cerradas, debido a ello y que no adoptó las medidas de seguridad necesarias tendientes a mantener el control y maniobrabilidad del vehículo que se conducía, motivó que al ingresar al desarrollo de una curva hacia su derecha, superara la velocidad crítica de ésta, desplazándose tangencialmente hacia la parte externa de ésta en proceso de ronceo, para finalmente volcar sobre su lateral izquierdo chocando con una ladera de un cerro y conforme a las causas establecidas el accidente sería una falla humana en la conducción.

Expone que el conductor no poseía licencia válida para el tipo de vehículo que manejaba (la licencia colombiana no le permite conducir vehículos comerciales en Chile, conforme a tratado de Viena y Ley N° 18.290). Continúa indicando que imputa responsabilidad a las demandadas individualizadas, por cuanto Transportes CCU Limitada, la primera sería contratista y mandante de Sociedad Logísticas del Norte Limitada, según contrato de prestación de servicios de transporte y publicidad, que celebró en su oportunidad, por lo tanto, subcontratista y quienes, a su vez, contrataron al transportista Luis Javier Cifuentes Aguirre. Así las cosas, todos los demandados, mandante, contratista, y el subcontratista Cifuentes eran deudores de la seguridad de las víctimas fatales y trabajadores.

Alega que la demanda es plenamente procedente respecto de cada uno de los demandados, por cuanto, estaría probada la relación contractual entre los



involucrados y así es concurrente el libelo pretensor con el artículo 2320 del Código Civil, dado que la mandante CCU, sostenía una relación contractual con una empresa de su Grupo, Transportes CCU Limitada, luego ésta, tenía un contrato con la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda. y ésta última a su vez, celebró un contrato con el sub contratista Luis Javier Cifuentes Aguirre.

Solicita tener por interpuesta demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, en contra de las demandadas, y se condene a las demandadas al pago de las indemnizaciones y de manera solidaria, por los conceptos que se indican y para las personas que siguen: María Guadalupe Vásquez Rojo la suma de \$100.000.000.- por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de su cónyuge; Jhon Mayckol Esquivel Vásquez, la suma de \$100.000.000.- por concepto de daño moral sufrido; Jonathan Ignacio Esquivel Vásquez, la suma de \$100.000.000.- por concepto de daño moral; Erick Evaristo Esquivel Vásquez, la suma de \$100.000.000.-, por concepto de daño moral sufrido y, la suma de \$ 152.000.000.- por concepto de lucro cesante; Alonso Rivera Ramos, la suma de \$ 100.000.000.- por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de su hijo Alfredo Rivera Becerra; Luzdary Becerra de Rivera, la suma de \$ 100.000.000.-, por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de su hijo; Mónica María Rivera Becerra, la suma de \$ 100.000.000.- por concepto de daño moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de su hermano; c) que, las indemnizaciones o valores establecidos en la sentencia deberán ser pagados, con reajustes e intereses desde la fecha del daño causado, esto es desde el día del accidente. d) que, se condene a las empresas demandadas en forma solidaria al pago de las costas de la causa.

En subsidio, se condene a las demandadas a pagar de manera individual o simplemente conjunta o mancomunada a cada uno de los actores, respectivamente, las sumas menores a la solicitud principal que se determinen en definitiva, por concepto de daño moral y lucro cesante, todo ello con los reajustes e intereses que se determinen, con costas.

2.- La demandada Transporte CCU Ltda. opone la excepción de cosa juzgada fundado en que los demandantes accionaron en su contra ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol N° 15764-2013, caratulada “Vásquez con Compañía” y con fecha 13 de mayo de 2016, se dictó sentencia de primera instancia rechazando en todas sus partes la demanda. Recurrida de casación en



la forma y apelación, se dicta sentencia rechazando la nulidad, y confirmando en todas sus partes el fallo de primera instancia y, con fecha 17 de abril de 2017, el Tribunal de Primera instancia dictó el cúmplase quedando ejecutoriada la sentencia definitiva, y gozando en consecuencia de autoridad de cosa juzgada.

Insiste que su representada contrató el servicio de carga con Sociedad Logística del Norte Ltda., empresa con prestigio en el rubro, como consta de la propia demanda, por lo que ninguna responsabilidad puede tener y, además, señala que nada pudo hacer para evitar un accidente de tránsito ocurrido en la vía pública, donde aparentemente la única y exclusiva causa fue un factor humano. Continúa, alegando que tampoco concurren en el presente juicio los requisitos generales de la responsabilidad extracontractual al no existir acción ni omisión culpable en la sede competente, de la cual pueda emanar responsabilidad y siendo así la demanda debe ser rechazada.

Precisa en cuanto a los perjuicios alegados y el monto de las indemnizaciones solicitadas por daño moral y lucro cesante, que no corresponde por su parte el soporte de indemnización alguna, sin perjuicio de ello rechaza los montos que se demandan, los que niega y controvierte para todos los efectos probatorios que en derecho correspondan y declara, además, que la responsabilidad civil no puede ser nunca fuente de enriquecimiento sino una estricta indemnización –en el caso satisfactoria– de los perjuicios causados.

3.- La demandada Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Limitada solicita el rechazo de la acción intentada, en todas sus partes y con costas, primero alegando la excepción de cosa juzgada fundada en que la controversia fue conocida y zanjada por tribunales, en la causa tramitada ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-15.764-2013, caratulada “Vázquez con Compañía Cervecería Unidas S.A. y otras”.

Subsidiariamente, opone excepción perentoria de prescripción extintiva de la acción judicial de autos, respecto de los demandantes María Guadalupe Vásquez Rojo, Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera y Mónica María Rivera Becerra, concluyendo que de acuerdo al artículo 2332 del Código Civil, la acción dirigida en su contra se encuentra prescrita, ya que el accidente data del 3 de noviembre de 2012 y la demanda de autos fue notificada el 23 de octubre de 2017, 4 años después de los hechos en los cuales se funda la presente acción, período que excede el plazo exigido por el artículo 2332 del Código Civil.



Además, no concurre ninguna circunstancia que pueda haber interrumpido la prescripción que esta parte alega. En efecto, y tal como fuera reconocido al momento de oponer la excepción de cosa juzgada, los demandantes de autos interpusieron una acción civil en contra de su representada, buscando la indemnización de perjuicios, proceso judicial que terminó por medio de una sentencia judicial absolutoria, circunstancia prevista en el artículo 2503 del Código Civil, para no dar lugar a la interrupción de la prescripción. Asimismo, opone excepción perentoria de falta de legitimación pasiva alegando que no ha tenido participación alguna en los hechos en que se funda la acción indemnizatoria de autos y que no existe relación causal entre el daño que se reclama y alguna acción u omisión que le sea atribuible a su representada.

**Tercero:** Que para efectos de ordenar el raciocinio que se desarrollará y contextualizar las infracciones que denuncia la recurrente, es pertinente considerar los hechos asentados en la sentencia:

1.- Que con fecha 3 de noviembre de 2012, en circunstancias que Erick David Esquivel Tapia, Alfredo Rivera Becerra y Jacob Andrés Osorio Torijano se dirigían en camión placa patente única DCHF.39 a la localidad de Taltal, Segunda Región, circulando por la ruta B-70, al llegar al kilómetro 7 de la misma –Cuesta Paposo– dicho vehículo sufrió un accidente.

2.- Que con motivo de dicho accidente fallecieron los ocupantes.

3.- Que la causal basal del accidente fue el exceso de velocidad, en un camino con curvas y pendiente pronunciadas, y no tomar las medidas de seguridad necesarias tendientes a mantener el control y maniobrabilidad del vehículo que se conducía, lo que motivó que al ingresar al desarrollo de una curva hacia su derecha, superara la velocidad crítica de ésta en proceso de ronceo, para finalmente volcar sobre su lateral izquierdo.

4.- Que Erick David Esquivel Tapia, Alfredo Rivera Becerra y Jacob Andrés Osorio Torijano, prestaban servicios para el empresario transportista Luis Javier Cifuentes Aguirre, los dos primeros desempeñándose como cargadores-repartidores y el tercero como chofer-repartidor.

5.- Que, ante el 15° Juzgado Civil de Santiago Rol C-15764-2013, se tramitó la causa caratulada “Vásquez con Compañía Cervecerías Unidas S.A. y otros”, cuyos demandantes fueron María Guadalupe Vásquez Rojo por sí y en representación de sus hijos menores de edad Jhon Mayckol y de Jonathan, todos Esquivel Vásquez, Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera, Mónica



María Rivera Becerra, Gina Marcela Rojas Ospina por sí y en representación de la menor Camila Andrea Osorio Rojas y como demandados Compañía de Cervecerías Unidas S.A., Transportes CCU Limitada, Sociedad Logísticas del Norte Limitada y Luis Javier Cifuentes Aguirre.

6.- Que la referida sentencia estableció como hechos acreditados que Jacob Osorio Torijano contaba con permiso internacional para conducir vehículos categorías A y C sin exclusiones de países con vigencia hasta el 10 de noviembre del año 2012, y que lo habilitaba para conducir en Chile conforme a la Convención de Ginebra. El fallo además expresa que no hay evidencias que las demandadas (las mismas que en la presente causa) hubiesen incurrido en alguna acción u omisión ilícita.

**Cuarto:** Que el tribunal de alzada confirmó sin modificaciones el fallo de primer grado que acogió la excepción de cosa juzgada. Para ello los jueces establecieron que del mérito del juicio Rol N° C-15764-2013 seguido ante el 15° Juzgado Civil de Santiago es posible colegir que en la presente causa se encuentran siete de los nueve demandantes del proceso anterior y respecto de los demandados se repiten en estos autos dos de los cuatro de la causa que precedió.

Enseguida, reflexiona en cuanto a la identidad de la cosa pedida, es la indemnización de perjuicios, fundado en la supuesta responsabilidad extracontractual de las empresas demandadas por su falta de vigilancia y que motivó el accidente de noviembre del año 2012 con fatales consecuencias y respecto de la identidad de causa de pedir, señala que se demanda indemnización de perjuicios en base a la supuesta responsabilidad extracontractual de las demandadas y que de su lectura se advierte que son prácticamente idénticas.

Siguiendo con el razonamiento, expone que la identidad de las partes, el objeto y la causa de pedir son las mismas y solo variaría en la demanda deducida en autos, en cuanto a que la responsabilidad extracontractual lo es por hecho ajeno fundado en el artículo 2320 del Código Civil y, ante el 15° Juzgado Civil lo fue por la responsabilidad del empresario y la presunción del artículo 2329 del Código Civil.

Concluyen que en el ejercicio simple de comparación de las demandas en comento se puede observar y constatar que la exposición de hechos y el sustrato fáctico en cada una de ellas es prácticamente idéntico, ofreciendo pequeñas variaciones, siendo el relato de las actoras sustancialmente el mismo en ambas



demandas, centrado los hechos de los cuales se alega responsabilidad extracontractual en que el conductor del camión no contaba (a juicio del demandantes) con licencia para conducir camiones en Chile y la culpa estaría dada por la negligencia al enviar el camión con personal inadecuado y carente de experiencia, situación revisada y que en su momento motivo de un pronunciamiento judicial que se encuentra firme y ejecutoriado, en virtud del cual se exime de responsabilidad a los demandados.

Agrega que la cosa pedida en ambas demandas es idéntica cual es el beneficio jurídico como es la indemnización por responsabilidad extracontractual y que se traduce en idéntica pretensión jurídica, y la causa de pedir es la misma como son el mismo hecho material y jurídico, todo lo cual hace que en la especie se presentan los requisitos legales, concurriendo la identidad legal de partes, el beneficio jurídico que se solicita y que se reclama, y su fundamento inmediato que se fundan en los mismos hechos materiales y jurídicos, para configurar la excepción perentoria de cosa juzgada.

Más adelante, razona que es conveniente considerar que respecto de las demandantes María Guadalupe Vásquez Rojo, Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera y Mónica María Rivera Becerra, atendido la fecha del accidente ocurrido el 3 de noviembre del año 2012 y la fecha de notificación de la demanda el 23 de octubre del 2017, la acción igualmente se encuentra prescrita atendido el resultado de la causa seguida ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, lo que no permitió la interrupción de la acción, la que siguió corriendo.

**Quinto:** Que la excepción de cosa juzgada es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales en virtud del cual no puede volver a discutirse, ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior.

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil establece que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de personas, de cosa pedida y de causa de pedir.

Debe puntualizarse, desde luego, que el contenido y alcance de la cosa juzgada tiende a producir la certeza de los derechos, quedando prohibido todo nuevo pronunciamiento sobre lo que fue juzgado; constituyendo parámetro para





la calificación de dicha excepción la coexistencia de decisiones incompatibles, es decir, que pugnan una con la otra.

La cosa juzgada impide que sobrevenga otra decisión sobre una determinada materia que ya fue debatida y sentenciada por fallo firme entre sujetos determinados, de donde surgen los límites de dicho instituto, como el subjetivo que apunta a los sujetos que legalmente fueron parte en el juicio y el objetivo que se refiere a la materia sentenciada determinada por el objeto y la causa a pedir.

En cuanto a los elementos de la excepción de cosa juzgada, cabe señalar que para que exista identidad legal de personas es necesario que las partes que litigan en ambos pleitos lo hagan en las mismas calidades. A su vez, la cosa pedida consiste en el beneficio jurídico que se reclama en el juicio. Al respecto se ha dicho que: “Existe identidad de la cosa pedida, cuando el beneficio jurídico que se reclama en el nuevo juicio es el mismo que se demandó en el juicio anterior”. (STOEHLER MAES, Carlos Alberto: “De las Disposiciones Comunes a Todo Procedimiento y de los Incidentes”. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 1995, p. 132).

A su turno, la causa de pedir se relaciona con el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, es decir, la razón o fundamento de la petición que se formula. Para determinar si existe coincidencia en los requisitos enunciados es necesario examinar la naturaleza jurídica de las acciones deducidas, las pretensiones reclamadas y las razones de la misma.

**Sexto:** Que en una controversia la identidad objetiva de la cosa juzgada puede resultar muy complejo de determinar debido a las dificultades relativas al concepto de causa de pedir. En la doctrina existe consenso en cuanto a que esta identidad no puede configurarse de una simple comparación literal entre lo fallado con anterioridad y la causa pedir y el *petitum* de la nueva demanda, desarrollándose distintos criterios para dilucidar si existe o no la identidad que precisa la cosa juzgada como excepción perentoria en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el punto De la Oliva expresa que “por imperativo lógico, la cosa juzgada comprende lo que esté implícita, pero necesaria e inescindiblemente afirmado por la negación que aquella puede contener”. (DE LA OLIVA SANTOS, Andrés: “Sobre la Cosa Juzgada”. Madrid. Editorial Universitaria Ramón Areces, 1991, p. 56), lo que se traduce en que la cosa juzgada cubre lo deducido y lo deducible y en este sentido la



doctrina italiana formula esta regla, expresando que “*Il giudicato copre el dedotto e il deducibile*”. Por su parte, Tapia Fernández afirma que: “esta máxima refleja la lógica consecuencia de la naturaleza jurídica de la cosa juzgada como concreta determinación de las recíprocas situaciones jurídicas de las partes en contienda, y no como una mera operación cognoscitiva sobre los argumentos o razones o sobre el valor persuasivo o no de las pruebas; de tal modo que, establecida en la sentencia la concreta relación jurídica entre las partes, es irrelevante que a tal resultado se haya llegado acogiendo o rechazando tal argumentación o tal prueba”. (Tapia Fernández, Isabel: “El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa Juzgada”. Madrid. La Ley, 2000, pp. 155-156). Otro criterio que se utiliza para definir si hay o no cosa juzgada se refiere a la incompatibilidad en la ejecución.

**Séptimo:** Esta Corte ha resuelto que la identidad de la causa de pedir ha de buscarse en el beneficio jurídico y no en la materialidad de las prestaciones, sin que pueda pretenderse sean iguales en substancia y accidentes (en sentencias de 11 de diciembre de 1937, RDJ, t. 35, sec. 1ª, p. 238 y de 7 de agosto de 1961, RDJ, t. 58, sec. 1ª, p. 263). Asimismo, ha precisado que la búsqueda de la identidad jurídica de lo decidido debe estar desprovista de formalismos enervantes, que se agoten en un análisis meramente literal de las denominaciones utilizadas para individualizar las acciones. Así planteadas las cosas, se trata de un acto de indagación, que en su correcto desenvolvimiento determine la sustancia última de las afirmaciones y peticiones de tutela jurisdiccional, sin que se reduzca a la identidad de una acción por la denominación que le atribuyen las partes, siendo menester estar a la finalidad de la acción ejercitada (sentencias de 11 de noviembre de 1931, RDJ, t. 29, sec. 1ª, p. 167 y de 9 de julio de 1953, RDJ, t. 52, sec. 1ª, p. 164).

El fundamento de la cosa juzgada material radica en la necesidad de evitar la reproducción indefinida de litigios y de conseguir la necesaria estabilidad y seguridad jurídica.

**Octavo:** Que corresponde analizar si la sentencia dictada en el juicio ordinario, Rol N°15764-2013 seguido ante el 15° Juzgado Civil de Santiago, iniciada por María Guadalupe Vásquez Rojo por sí y en representación de sus hijos menores de edad Jhon Mayckol, y Jonathan Ignacio, ambos Esquivel Vásquez y Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera, Mónica María Rivera Becerra, Gina Marcela Rojas Ospina por sí y en representación de la



menor Camila Andrea Osorio Rojas, en que se demandó por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del empresario prevista en el artículo 2329 del Código Civil originada en el accidente de noviembre del año 2012, produce el efecto de cosa juzgada en el juicio en el que recae este recurso de nulidad sustantiva, en el que siete de los nueve demandantes del proceso anterior ejercitan su acción en contra de dos de los demandados en el juicio anterior, solicitando la indemnización de los perjuicios por la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno del artículo 2320 del Código Civil.

**Noveno:** Que en cuanto al primero de los requisitos de la acción, esto es, la identidad legal de personas, este se satisface al coincidir en ambos litigios las partes demandantes y demandadas.

Luego, por lo que toca el requisito de la identidad de la cosa pedida, al tratarse de dos demandas de indemnización de perjuicios, es evidente que se cumple el requisito relativo al beneficio jurídico que se persigue en ambos juicios por las demandantes. El objeto de ambas pretensiones es obtener la reparación del daño derivado del ilícito civil imputable a la acción y omisión culposa de las demandadas

**Décimo:** Respecto a la identidad de la causa de pedir, que, como ha quedado dicho, es el fundamento inmediato del derecho invocado por la demandante en juicio, habrá que examinar, no solo, la naturaleza jurídica de las acciones deducidas en ambos juicios, sino que, ante todo, la razón fundamento inmediato del derecho, en este caso, a la indemnización de los daños derivados del ilícito imputable a las demandadas. Al hacerlo se descubre que, mientras la acción ejercitada en el primer juicio tiene como fundamento inmediato la culpa del empresario por el hecho propio con arreglo artículo 2329 del Código Civil, el fundamento inmediato del derecho a la indemnización que solicitan las demandantes es la culpa del chofer dependiente que hace presumir, conforme con lo que dispone el artículo 2320 del Código Civil, la culpa de las demandadas por el hecho ajeno. En otros términos, en el primer juicio el fundamento inmediato de la acción de indemnización es la responsabilidad por el hecho propio del artículo 2329 del Código Civil; en el segundo es la responsabilidad por hecho ajeno del artículo 2320 del mismo cuerpo legal.

En efecto, en el primer juicio se alega la responsabilidad de las empresas demandadas por la negligencia de los demandados al enviar el camión con personal inadecuado y carente de experiencia conforme con el citado artículo



2329 del Código Civil. En cambio, en este juicio, la acción se en la responsabilidad por el hecho ajeno de las demandadas conforme al artículo 2320 del Código Civil, que se funda en la falta de control y supervisión de la conducta del chofer del camión al guiar el vehículo a una mayor velocidad que la permitida y al ingresar a tomar la curva chocó contra la ladera del cerro y se volcó, causando su muerte y la de sus acompañantes.

Entonces, si bien la presente acción se basa en los mismos hechos que el anterior, al indagar el fundamento jurídico inmediato de la petición indemnizatoria, se advierte que el título de atribución es diverso: en el primero, la culpa propia del empresario; en el segundo, la culpa del tercero dependiente respecto de la cual se hace responsable al empresario.

En este juicio, se reclama la responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno, que tiene su base en la culpa de quien comete el hecho ilícito que causa daños, presumiéndose, según lo dispone el artículo 2320 del Código Civil, la culpa del guardián o tercero responsable (demandados).

En consecuencia, el fundamento jurídico inmediato de ambas demandas no es el mismo. La culpa invocada en ambas demandas así lo confirma. En este pleito, el asunto a resolver estará centrado en la conducción negligente del chofer del camión que causó el accidente y la responsabilidad que le cabe a las demandadas en su rol de empresas que habían contratado los servicios del chofer causante de la colisión.

**Undécimo:** Que, en las condiciones antes anotadas no cabe más que concluir que los jueces, al acoger la excepción de cosa juzgada han vulnerado el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, porque si bien en ambos juicios se cumple con los requisitos de la identidad legal de partes y de objeto pedido, no sucede lo mismo con la causa de pedir de ambos procesos, tal y como quedó asentado en el motivo precedente; infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo al conducir a los jueces a acoger, equivocadamente, la excepción de cosa juzgada.

**Duodécimo:** Que, en virtud de lo expuesto, el recurso de casación sustantiva será acogido.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, **se acoge** el recurso de casación en el fondo deducido por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza, en representación de la parte demandante, contra la sentencia de diecinueve de



junio de dos mil veintitrés dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago invalidándose, y se la reemplaza por aquella que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Acordada con el **voto en contra** de la Ministra Sra. Repetto quien estuvo por rechazar el recurso de casación en el fondo en base a las siguientes consideraciones:

1.- Que, la cosa juzgada es una institución de orden público y constituye uno de los fundamentos necesarios del régimen jurídico al asegurar la certidumbre y estabilidad de los derechos que ella consagra. Este instituto procesal, impide que sobrevenga otra decisión sobre una determinada materia que ya fue debatida y sentenciada por fallo firme entre sujetos determinados, de donde surgen los límites de dicho instituto, como el subjetivo que apunta a los sujetos que legalmente fueron parte en el juicio y el objetivo, que se refiere a la materia sentenciada, determinada por el objeto y la causa a pedir.

2.- Que, el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil se refiere a los presupuestos que se requieren para que operen los efectos de la cosa juzgada. Al efecto, dispone esta norma: "La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1º Identidad legal de personas; 2º Identidad de la cosa pedida; y 3º Identidad de la causa de pedir. Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio".

3.- Que, en cuanto a los elementos de la excepción de cosa juzgada, cabe señalar que existe identidad legal o jurídica de personas cuando las partes figuran en el nuevo juicio en la misma calidad que en el anterior. El demandante y el demandado deben ser en ambos juicios la misma persona jurídica; es indiferente que sean o no la misma persona física.

A su vez, la cosa pedida, consiste en el beneficio jurídico que se reclama en el juicio y al cual se pretende tener derecho. Existe, por lo tanto, identidad de la cosa pedida, cuando el beneficio jurídico que se reclama en el nuevo juicio es el mismo que se demandó en el juicio anterior. Al respecto se ha dicho que: "para determinar si concurre la identidad de la cosa pedida no debe atenderse a la materialidad del objeto que se reclama, sino al derecho que se discute. Cuando el derecho discutido es el mismo, existe la identidad de la cosa pedida, aun cuando se trate de cosas materialmente distintas. Por el contrario, no



concorre la identidad de la cosa pedida, cuando el derecho discutido es distinto, a pesar de que la cosa material sea la misma” (Cortez M., Gonzalo y Palomo V, Diego: “Normas comunes a todo procedimiento e incidentes”. Edit. Thomson Reuters, Santiago, 2018, p. 290).

A su turno, la causa de pedir, se relaciona con el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, es decir, la razón o fundamento de la petición que se formula. Para determinar si existe coincidencia en los requisitos enunciados es necesario examinar la naturaleza jurídica de las acciones deducidas, las pretensiones reclamadas y las razones de la misma.

4.- Que, el tema de la identidad objetiva de la cosa juzgada, puede resultar muy complejo de determinar en una controversia por las dificultades que lleva en sí el concepto de causa de pedir. Para el profesor Romero Seguel, el problema del límite objetivo de la cosa juzgada se dirige a precisar qué debe ser comprendido dentro de lo decidido en la sentencia judicial que produce el efecto de cosa juzgada.

Continúa este autor: “En principio, el límite objetivo de la cosa juzgada opera cuando el segundo proceso tiene un objeto idéntico al primero.

Esta comprobación se hace atendiendo a los dos elementos objetivos que componen toda acción: la causa de pedir y el petitum. En palabras del Código de Procedimiento Civil, la identidad objetiva se dará cuando exista “identidad de la cosa pedida” y la “identidad de la causa de pedir” (Romero Seguel, Alejandro: “La cosa juzgada en el proceso civil chileno”. Edit. Jurídica de Chile, Santiago, 2002, p. 65).

En la doctrina existe consenso en cuanto a que esta identidad no puede configurarse de una simple comparación literal entre lo fallado con anterioridad y la causa pedir y el petitum de la nueva demanda, habiéndose desarrollado distintas pautas o criterios para resolver el conflicto. Así el autor Andrés De la Oliva expresa que “por imperativo lógico, la cosa juzgada comprende lo que esté implícita pero necesariamente negado por una afirmación contenida en la parte dispositiva de la sentencia y lo que esté implícita pero necesaria e inescindiblemente afirmado por la negación que aquélla pueda contener” (De la Oliva Santos, Andrés: “Sobre la Cosa Juzgada”. Edit. Ramón Areces, Madrid, 1991, p. 56; citado por Romero Seguel, Alejandro. Ob. Cit., p. 29); lo que se traduce en que la cosa juzgada cubre lo deducido y lo deducible.



Por su parte la autora Isabel Tapia Fernández señala que: “Históricamente se ha admitido sin discusión que la cosa juzgada cubre no sólo lo efectivamente deducido en el primer proceso, sino también lo que pudo deducirse” Luego, agrega la misma autora, que: “esta máxima refleja la lógica consecuencia de la naturaleza jurídica de la cosa juzgada como concreta determinación de las recíprocas situaciones jurídicas de las partes en contienda, y no como una mera operación cognoscitiva sobre los argumentos o razones o sobre el valor persuasivo o no de las pruebas; de tal modo que, establecida en la sentencia la concreta relación jurídica entre las partes, es irrelevante que a tal resultado se haya llegado acogiendo o rechazando tal argumentación o tal prueba. Todas las razones que se alegaron o se pudieron alegar quedan cubiertas por la cosa juzgada”. (Tapia Fernández, Isabel: “El objeto del proceso. Alegaciones. Sentencia. Cosa juzgada”, Madrid, La Ley, 2000, pp. 155-156. citado por Romero Seguel, Alejandro. Ob. Cit., p. 69 y 70).

5.- Que, sobre la materia esta Corte ha señalado que la identidad debe buscarse en el beneficio jurídico y no en la materialidad de las prestaciones, sin que pueda pretenderse sean iguales en substancia y accidentes (en sentencias de 11 de diciembre de 1937, RDJ, t.35, sec 1ª, p. 238 y 7 de agosto de 1961, RDJ, t. 58, sec. 1ª, p. 263). Asimismo, ha precisado que la búsqueda de la identidad jurídica de lo decidido debe estar desprovista de formalismos enervantes, que se agoten en un análisis meramente literal de las denominaciones utilizadas para individualizar las acciones. Por lo tanto, debe tratarse de un acto de indagación, que en su correcto desenvolvimiento determine la sustancia última de las afirmaciones y peticiones de tutela jurisdiccional, rechazando determinar la identidad de una acción sólo por la denominación que le atribuyen las partes a las acciones ejercitadas, debiendo estarse más bien a la finalidad que se persiga con la acción (Corte Suprema 11 de noviembre de 1931, RDJ, t. 29, sec 1ª, p. 167 y 9 de julio de 1953, RDJ, t.52, sec. 1ª, p.164).

6.- Que, lo que se ha expuesto, encuentra plena justificación en que el fundamento de la cosa juzgada material radica en la necesidad de evitar la reproducción indefinida de litigios y de conseguir estabilidad y seguridad jurídica. Por ello, resulta improcedente permitir a una parte que omitió alguna referencia de hecho o que no aportó pruebas suficientes que reproduzcan nuevamente su acción, salvo que efectivamente la nueva pretensión esté amparada en una causa de pedir distinta de la anteriormente fallada (en este sentido Romero Seguel,



Alejandro. Ob. Cit., p. 70). En tal orientación, esta Corte ha establecido que no debe confundirse la causa de pedir con los medios que se emplean para demostrarla, razón por la cual, aunque se acompañen nuevos medios de prueba en un proceso posterior, ello no puede significar que se esté frente a una nueva causa de pedir (Corte Suprema, 17 de agosto de 1910, RDJ, t. 8, sec. 1ª, p. 459; 8 de julio de 1941, RDJ, t. 39, sec. 1ª, p. 41; y 24 de agosto 1948, RDJ, t. 45, sec. 1ª, p. 721).

7.- Que volviendo al caso que nos ocupa, y muy particularmente a la identidad objetiva de la cosa juzgada, que en palabras del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, se dará cuando exista “identidad de la cosa pedida” y la “identidad de la causa de pedir”, se debe indicar que cuando el precepto citado habla de “identidad de cosa pedida” -dentro del sentido natural y obvio de tal expresión y considerando, indudablemente, el fin jurídico de la institución de la cosa juzgada: hacer indiscutible, entre las mismas partes, y por igual causa de pedir, la certeza jurídica de las sentencias judiciales- está indicando que es necesario que en la nueva demanda se pida “lo mismo”, vale decir, el mismo beneficio jurídico que se pidió en la anteriormente resuelta.

8.- Que, tratándose de dos demandas de indemnización perjuicios por responsabilidad extracontractual es inconcuso, desde luego, que en ambas el derecho reclamado es ser resarcido de los daños causados por el hecho ilícito basado en el accidente del tránsito imputable a la culpa de las demandadas, de donde se desprende que existirá la identidad de cosa pedida y de la causa de pedir entre ellas.

En efecto, en el ejercicio simple de comparación de las demandas en comento se puede observar y constar que la exposición de hechos y el sustrato fáctico en cada una de ellas es prácticamente idéntico, ofreciendo pequeñas variaciones quedando el relato de las actoras en ambas demandas sustancialmente el mismo centrado los hechos de los cuales se alega responsabilidad extracontractual en que el conductor del camión no contaba (a juicio del demandantes) con licencia para conducir camiones en Chile y al culpa estaría dada por la negligencia al enviar el camión con personal inadecuado y carente de experiencia, situación revisada y que en su momento motivo de un pronunciamiento judicial que se encuentra firme y ejecutoriado, en virtud del cual se exime de responsabilidad a los demandados.





De este modo, el beneficio jurídico de ambas demandas, mirado a través de su aspecto jurídico es el mismo; La misma petición con los mismos antecedentes, en ambos juicios, excluye la idea de un beneficio diverso, tanto jurídico como material.

9.- Que, por lo demás, no desaparece la consecuencia negativa de la cosa juzgada cuando mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, pues no es correcto procesalmente plantear de nuevo la misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, no pudieron demostrarse, o el Juzgador no los atendió. De ahí entonces, para determinar la existencia de la identidad objetiva entre los procesos ha de tomarse en consideración lo deducido en el primer proceso y, además, lo que hubiera podido deducirse en él.

10.- Por otro lado, la cosa juzgada imposibilita replantear indefinidamente un problema ante los Tribunales de Justicia. En la esencia de la inmutabilidad de la cosa juzgada está el principio de seguridad jurídica pues la vida jurídica no puede soportar una renovación continua del proceso, debiendo preferirse el efecto preclusivo de la cosa juzgada como mal menor ante el principio de seguridad jurídica.

11.- Que, como corolario, se da en la especie perfecta identidad entre las partes, demandantes y demandados; y sentado el hecho de la identidad de lo demandado en los respectivos juicios y siendo indiscutible que en éstos se ejercitaba el mismo derecho, resulta indudable la identidad de beneficio jurídico, o de cosa pedida, así como el de causa de pedir, desde el momento que el fundamento del derecho deducido en juicio es idéntico, ya que en ambos se está haciendo valer la responsabilidad de los demandados en una negligencia en haber permitido la conducción de un vehículo causante del accidente a una persona que no contaba con la calificación suficiente ello, lo que no se ve alterado por la circunstancia de argumentarse que en un caso hubo una responsabilidad directa, y en el otro por el hecho ajeno, ya que en definitiva esta clase de responsabilidad es una responsabilidad propia en el sentido de no haber observado del debido cuidado y vigilancia, a que estaba obligado respecto del autor material del hecho.

12.- Que de este modo, los jueces del grado, al desestimar la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada, no han incurrido en la causal de



casación fondo que se analiza, por lo que la nulidad impetrada en opinión de esta disidente no puede prosperar.

Regístrese.

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Álvaro Vidal y el voto de su autora.

**Rol N° 154.546-2023.**

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Juan Eduardo Fuentes B., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Repetto G., señora María Soledad Melo L. y el Abogado integrante señor Álvaro Vidal O. No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firman el Ministro señor Fuentes B., por haber terminado sus funciones y el Abogado Integrante señor Vidal O., por estar ausente. Santiago, 03 de febrero de 2025.

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO  
MINISTRO  
Fecha: 03/02/2025 15:34:02

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO  
GARCIA  
MINISTRA  
Fecha: 03/02/2025 15:34:03

MARIA SOLEDAD MELO LABRA  
MINISTRA  
Fecha: 03/02/2025 15:34:03



En Santiago, a tres de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, tres de febrero de dos mil veinticinco.

En cumplimiento a lo ordenado en el fallo precedente y lo estatuido en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil se pronuncia la siguiente sentencia de reemplazo.

**VISTOS:**

Se reproduce la sentencia apelada, con excepción de sus fundamentos noveno a décimo octavo, que se eliminan.

**Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:**

1º Lo razonado en los basamentos segundo, quinto a décimo de la sentencia de casación.

2º Para la procedencia de la excepción de cosa juzgada, es menester que concurra la triple identidad a que se refiere el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, que la presente acción haya sido entablada por y contra las mismas personas que litigaron en el juicio anterior que se invoca, y que sea idéntica en la cosa pedida y en la causa de pedir, teniendo presente que cuando la ley habla de identidad, no exige una igualdad tan completa entre ambas demandas, como si fuere copiada una de otra.

3º Que, en cuanto a la identidad legal de personas, primer requisito de la excepción en comento, debe reseñarse que ésta existe cuando las partes “jurídicas” de ambos juicios son las mismas, sin que ello involucre necesariamente que los comparecientes sean física y exactamente los mismos. A este respecto, en la presente causa se encuentran siete de los nueve demandantes de la causa llevada en el 15º Juzgado Civil de Santiago ya individualizada (solo faltan Gina Marcela Rojas Ospina y Camila Andrea Osorio Rojas) y respecto de los demandados se repiten en estos autos dos de los cuatro de causa ya indicada que precedió a la que se decide.

4º Que, concurriendo el primer supuesto de la excepción de cosa juzgada, corresponde entrar a determinar si se dan los dos restantes, vale decir, la cosa pedida y la causa de pedir.

En cuanto a la identidad de la cosa pedida, en ambos procesos es la misma, esto es, obtener la indemnización de perjuicios fundado en la supuesta responsabilidad extracontractual de las empresas demandadas por su falta de vigilancia y que motivó el accidente de noviembre del año 2012 con fatales consecuencias.



5º En cuanto a la identidad de causa de pedir, en el primer pleito nueve de los siete ahora demandantes deducen acción de indemnización de perjuicios centrando los hechos en que el conductor del camión no contaba con licencia para conducir camiones en Chile y la culpa estaría dada por la negligencia al enviar el camión con personal inadecuado y carente de experiencia, fundada en la responsabilidad del empresario y la presunción del artículo 2329 del Código Civil.

En el presente proceso, en cambio, la acción indemnizatoria intentada por siete actores se funda en la responsabilidad por el hecho ajeno de las demandadas conforme al artículo 2320 del Código Civil, y los hechos se basaron en la conducción antirreglamentaria e imprudente del chofer demandado al guiar el vehículo a una mayor velocidad que la permitida y al ingresar a tomar la curva chocó contra la ladera del cerro y se volcó, causando su muerte y la de sus acompañantes.

Si bien la actual acción se basa en el mismo accidente, al indagar en la razón o sustancia de tal petición nos enfrentamos a una atribución de culpa que es sin duda distinta, ya que en el primer litigio la imputación se basa en que el conductor del camión no contaba con licencia para conducir camiones en Chile y la culpa estaría dada por la negligencia al enviar el camión con personal inadecuado y carente de experiencia; resolviendo los jueces que el empleador directo de los fallecidos aparece actuando conforme al estándar del hombre cuidadoso o el buen padre de familia, dentro del marco de un cuidado medio, pues el móvil siniestrado era del año anterior apenas, contaba con revisión técnica y mantenciones al día y, además, los trabajadores fueron advertidos de los peligros de su trabajo y recibieron una copia del reglamento interno; a lo que debe agregarse que el conductor contaba con una licencia válida, declaró tener una larga experiencia en el rubro y además el camino donde tuvo lugar el accidente contaba con la señalética pertinente. En cambio, en el presente proceso, la culpa que se imputa a los demandados se basa en que el chofer no adoptó las medidas de seguridad necesarias para mantener el control del móvil, disminuyendo la velocidad en la pendiente, “enganchando” el camión, reduciendo la marcha o cambio del motor, utilizando en forma intensa y prolongada los frenos, los que perdieron fricción y con ello su efecto, lo que necesariamente implica indagar en razones y fundamentos que requieren de un pronunciamiento distinto en el tribunal. Al margen de la culpa que se le imputa



al chofer causante de la muerte de los ocupantes (infracción de distintos deberes de conducta), lo determinante para rechazar la existencia de identidad de causa de pedir, tal y como ha quedado dicho en la sentencia de nulidad, es que en el primer pleito se reprocha culpa por el hecho propio; en cambio, en este juicio, el reproche a los demandantes es por la culpa del chofer dependiente.

De este modo, el fundamento jurídico inmediato de ambas pretensiones no es el mismo.

En este segundo pleito, el asunto a resolver se centra en la conducción negligente del chofer del camión que causó el accidente y la responsabilidad que le cabe a las demandadas en su rol de empresas que habían contratado los servicios del chofer causante de la colisión, respecto del cual tenían a su cargo el cuidado y control. Se trata de una culpa presumida por el daño cometido culpablemente por el chofer.

**6º** Que, de este modo, la excepción de cosa juzgada interpuesta, habrá de ser rechazada, puesto que entre la actual causa y el proceso Rol C-15764-2013 seguido ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, no concurre la identidad de causa de pedir, lo que conlleva al rechazo de la excepción.

**7º** Que, en cuanto a la excepción de prescripción opuesta respecto de las demandantes María Guadalupe Vásquez Rojo, Alonso Rivera Ramos, Luzdary Becerra de Rivera y Mónica María Rivera Becerra, atendido la fecha del accidente ocurrido el 3 de noviembre del año 2012 y la fecha de notificación de la demanda el 23 de octubre del 2017, la acción se encuentra prescrita por haber transcurrido más de cuatro años, lo que llevará a acoger la excepción respecto de los actores mayores de edad.

Respecto de los demandantes, hijos menores de edad Jhon Mayckol, Jonathan Ignacio y Erick Evaristo, todos de apellido Esquivel Vásquez, demandantes, la prescripción se encontraba suspendida conforme al artículo 2509 N° 1 del Código Civil.

**8º** Que, al rechazar la excepción de cosa juzgada opuesta por los demandados, corresponde a esta Corte pronunciarse acerca de la responsabilidad civil de las demandadas y, por lo mismo, sobre la procedencia de la acción indemnizatoria interpuesta conforme con el artículo 2320 del Código Civil que dispone: “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”. El precepto transcrito establece la regla de presunción de culpa por el hecho ajeno que afecta a quienes se



encuentran al cuidado y/o control de una persona capaz y que, por un hecho imputable a dolo o culpa, causa un daño a otro.

En el presente juicio las demandantes solicitan se condene solidariamente a las sociedades demandadas por el hecho de su dependiente a la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda.. el fundamento de su pretensión reposa en la infracción del deber de seguridad nacido de las relaciones contractuales entre Transportes CCU Limitada con su mandante CCU; y la sociedad Transportes CCU Limitada, en calidad de contratista, con la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda. y ésta última, en su calidad de subcontratista, con Luis Javier Cifuentes Aguirre, empleador del fallecido Jacob Andrés Osorio Torijano que, con su culpa, provocó la muerte de Erick David Esquivel Tapia y Alfredo Rivera Becerra.

9º Que, para resolución del asunto de fondo resultará útil considerar la citada regla del artículo 2320 del Código Civil que, como se ha dicho, establece una presunción de culpa por el hecho ajeno.

Sobre la regla del artículo 2320, Barros indica que: “El artículo 2320 I establece una presunción general de culpabilidad por el hecho de las personas que se encuentran bajo el cuidado o dependencia de otra. La responsabilidad por el hecho ajeno es, a la vez, una responsabilidad por el hecho propio (la negligencia en el cuidado) y una especie de garantía por el hecho ilícito del menor o del dependiente, que usualmente son insolventes”. Al referirse al fundamento de esta clase de responsabilidad, añade que: “El fundamento de la presunción es la existencia de un vínculo de autoridad o cuidado entre el guardián y el autor del daño. Más allá de los casos especialmente referidos por la ley, se ha entendido que esta relación de autoridad o cuidado es una cuestión de hecho. Por ello puede ocurrir que una relación contractual que usualmente no constituye dependencia (como un contrato de mandato, por ejemplo), dé lugar a la responsabilidad presumida del mandante si el mandatario actúa siguiendo sus instrucciones o de cualquier manera actúa de forma permanente bajo su dependencia”. (BARROS BOURIE, Enrique: “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2020, p. 180.). Y, por lo que toca a este requisito, el de la relación de dependencia o cuidado con quien causó el daño con culpa, indica el autor que no se requiere de una relación formal, sino que: “Lo que importa es que el principal haya estado en una posición de autoridad (cualquiera sea la fuente)



para impedir la ocurrencia del ilícito. La relación de cuidado se muestra en la circunstancia de que esa autoridad pudo ser usada como medio de prevención del daño” (BARROS BOURIE, Enrique, “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2020, p. 185).

Por su parte, Corral, al comentar el precepto legal sostiene que: "La atribución de responsabilidad se fundamenta en el deber de vigilancia o en el deber de correcta selección que tienen ciertas personas respecto de otras. Por tanto, no se responde sólo por la culpa ajena, sino también por la propia, que consiste en la falta de estos deberes (culpa in vigilando y culpa in eligendo) y que permite el desplazamiento de la culpa desde el agente directo al tercero responsable, pero que no permitirían encausar directamente al principal ya que faltaría el nexo causal entre una culpa in eligendo o in vigilando y el daño producido por el dependiente. De allí que se haya sostenido que el principal es un deudor sin responsabilidad ya que el único responsable es el dependiente. Esto es equivocado, pues ambos son responsables, aunque por atribuciones de responsabilidad diferentes: el dependiente por su culpa directa, y el principal por haber posibilitado dentro de la esfera de sus atribuciones que por intermedio de un agente suyo cause un daño a la víctima. La vulneración del deber de vigilancia o de selección que justifica este desplazamiento se presume. Tal presunción se aplica a toda persona que, por cualquier razón, tiene un deber de cuidar o vigilar los actos de otra (Corral Talciani, Hernán: “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual”. Santiago, Thomson Reuters, 2013, p. 228)

**10°** De lo dicho, se sigue que la atribución de responsabilidad al tercero por el hecho de otro, respecto de quien se presume su culpa, reposa en la existencia de una relación de cuidado entre él y el que causa el daño, una relación de cuidado o dependencia que impone el deber de vigilancia de la actuación del segundo, comprendiendo desde la correcta selección y su preparación para realizarla, tal es el caso de los auxiliares utilizados para la ejecución de alguna prestación, sean o no dependientes, tal es el caso, como se dirá, de los demandados en este juicio.

Entonces, en el supuesto del artículo 2320 del Código Civil, estrictamente hablando hay dos responsables, el agente que causa el daño; y el tercero respecto





del cual se presume la culpa en el cuidado y/o control del agente que causa el daño.

Esta relación de cuidado o dependencia impone al vigilante el deber de controlar que la persona bajo su cuidado no cause un daño a terceros, en términos tales que si lo causa, se presume su culpa. El tercero que tiene bajo su cuidado a quien causa un daño a otro es responsable por su propia culpa, la particularidad es que se trata de una culpa presumida.

Quiere decir que la ley presume que si esa persona causa el daño es porque el tercero no adoptó las medidas tendientes para prevenirlo y/o evitarlo, esto es, por su culpa.

Al utilizar esa persona para realizar una actividad, el asume el riesgo de que aquello suceda y, por esa razón, se le presume la culpa y resulta responsable frente a la víctima.

**11º** Además, habrá que considerar cuáles son los requisitos del supuesto de hecho para la aplicación de la presunción de culpa del artículo 2320 del Código Civil para así dilucidar si, en este caso, se cumplen o no los requisitos para aplicar la presunción de culpa del precepto legal citado.

Tales requisitos son: a) hecho ilícito imputable a la culpa o dolo del dependiente que cause daños a otro; b) que el dependiente sea capaz conforme con el artículo 2318 del Código Civil; y c) la relación cuidado o dependencia del causante del daño y el tercero que lo tiene bajo su cuidado.

**12º.** Antes de dilucidar si en este caso se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 2320 del Código Civil, esta Corte estima pertinente detenerse previamente en la descripción de la hipótesis fáctica sobre la cual ha de resolverse la responsabilidad de los demandados.

Se trata de la conducta que corresponde a la prestación de un servicio –el de transportar y entregar ciertas mercaderías– desplegada a través de una cadena de agentes intervinientes. En dicha cadena se identifican, el menos, tres eslabones. En el primero, la relación contractual entre Transportes CCU Limitada y la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda., que, en virtud de la cual, la primera encarga a la segunda los servicios de transporte de tales mercaderías; en el segundo eslabón, el contrato entre la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda. y Luis Javier Cifuentes Aguirre, en virtud del cual la primera subcontrata al segundo la ejecución del servicio; y, en el tercero y último eslabón, la relación laboral entre Luis Javier Cifuentes Aguirre y su dependiente



Jacob Andrés Osorio Torijano, a través de cual, junto a los dos trabajadores fallecidos, cumple con la obligación contraída.

En los extremos de esta cadena se encuentran, por un lado, Transportes CCU Limitada; y, por otro, don Jacob Andrés Osorio Torijano que, como se sabe, con su culpa, provoca la muerte de Erick David Esquivel Tapia y Alfredo Rivera Becerra.

Desde el punto de vista del derecho de contratos, se trata de un típico supuesto de ejecución de una prestación a través de auxiliares. La sociedad CCU contrata a Transportes CCU Limitada para que ejecute el servicio de transporte y reparto de mercaderías y este, a su vez, ante la opción de ejecutarla directamente —a través de sus medios y dependientes—, decide autónomamente encargar la completa ejecución de su obligación a un tercero que, a su vez, opta por proceder de la misma forma, delegando en Luis Javier Cifuentes. Al margen de los agentes intervinientes, quien se obligó para CCU fue Transportes CCU, asumiendo sobre sí el riesgo y la entera responsabilidad por la fiel y oportuna ejecución de su obligación. Deberá considerar, aunque aquí se trate de juzgar si procede o no la responsabilidad extracontractual de los demandados, que el artículo 1679 del Código Civil, ha permitido, en materia contractual, acuñar el principio de que el deudor es responsable por el hecho de sus auxiliares, sin distinguir, el eslabón en el que se produzca el daño.

**13º** Una vez descrito el supuesto fáctico sobre el cual esta Corte ha de pronunciarse acerca de la responsabilidad de los demandados. Corresponde, entonces, examinar si se cumplen o no los requisitos sobre los cuales descansa la presunción de culpa por el hecho ajeno del artículo 2320 del Código Civil.

En el juicio, las actoras demandan como responsables a los operadores de los dos primeros eslabones en la ejecución prestación del servicio de transporte, a la sociedad Transportes CCU Limitada y a la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda., y lo hacen por el hecho ajeno, particularmente de Jacob Andrés Osorio Torijano.

Pues bien, el primer requisito, como ha quedado dicho, se refiere a la culpa de Jacob Andrés Osorio Torijano. Al efecto, ponderada la prueba instrumental acompañada por la parte demandante, especialmente, la copia de informe técnico N° 82-A-2012 de la SIAT de Carabineros, Prefectura de Antofagasta, asociado a la investigación a cargo de la Fiscalía local de Taltal, Causa RUC N° 1201090902-1, de acuerdo al artículo 426 del Código de



Procedimiento Civil en relación al artículo 1712 del Código Civil, esta Corte da por acreditado que, con fecha 3 de noviembre de 2012, alrededor de las 08:20 horas, en circunstancias que los señores Erick David Esquivel Tapia, Alfredo Rivera Becerra y Jacob Andrés Osorio Torijano, se dirigían en el camión placa única DCHF.39-4, a la localidad de Taltal, Segunda Región, circulando por la ruta B-710. Que, al llegar al kilómetro 7 de la misma (cuesta Paposo), el móvil se desplazó lateralmente hacia la parte externa de la calzada, para finalmente volcarse, falleciendo en el lugar todos los ocupantes del vehículo. Que en lo que toca a la causa basal del accidente, esta fue que el chofer guiaba el camión en exceso de velocidad y no toma como medida de seguridad el “enganche” del vehículo, esto es, reducir la velocidad del motor, utilizando una marcha o cambio más lento, al tratarse de un camino con curvas y pendiente pronunciada.

El hecho antes descrito constituye una infracción de los artículos 114, 148, 172 N° 7 y 174 de la Ley N° 18.290, ilícito civil imputable a la culpa del chofer del camión fallecido Jacob Andrés Osorio Torijano.

Esta Corte concluye que se cumple sobradamente el primero de los requisitos del artículo 2320 del Código Civil.

Ahora, en lo relativo al segundo requisito, el agente del daño Jacob Andrés Osorio Torijano, según el artículo 2319 del mismo cuerpo legal, es una persona plenamente capaz, dándose por cumplido, entonces, el segundo requisito.

**14°** Corresponde ahora examinar si se cumple el tercer requisito, la existencia de una relación de cuidado o vigilancia entre los demandados y el agente del daño, don Jacob Andrés Osorio Torijano.

Para dilucidar si, en este caso, se cumple o no este requisito, habrá que considerar el supuesto fáctico ya descrito y calificar las relaciones que en él se identifican.

Para este objeto deberá considerarse que, de acuerdo a la doctrina y de está Corte, la aplicación del 2320 del Código Civil no requiere necesariamente de una relación de subordinación y dependencia -como la que existe entre un empleador y un trabajador o el progenitor y su hijo, entre otras- sino que también otras relaciones en las que el tercero se encuentra en posición de controlar la actuación de un auxiliar independiente suyo.

En la doctrina San Martín Neira, reconociendo esta comprensión amplia de este tercer requisito de artículo 2320, distingue entre “relación de cuidado” y “relación de servicio” (SAN MARTÍN NEIRA, Lilian, La distinción entre



relaciones de servicio y de cuidado en la responsabilidad extracontractual por hecho ajeno, Revista de Derecho (Valdivia), Tomo XXXVIII, N°2, Diciembre de 2024, pp. 29-47). La relación de cuidado ella corresponde a la tradicional relación de subordinación y dependencia, en cambio, en lo que interesa a este recurso, define los aspectos que caracterizan la “relación de servicio”, al indicar que: “aparecen como destacables dos aspectos. En primer lugar, el hecho de que el tercero, por sí o por intermedio de otro, encarga ciertas funciones al agente (lo que los romanos llamaban *praepositio*). En otras palabras, se trata del caso en que un sujeto se sirve de otro para llevar a cabo actividades que son de su incumbencia, de ahí la denominación de ‘relaciones de servicio’. En segundo lugar, parece indispensable que en el ejercicio de esas funciones el agente actúe bajo la dirección o las instrucciones generales impartidas por el principal. Así, no se trata de cualquier relación de servicio, sino de una que implica posibilidad de dirigir el curso de acción del tercero” (SAN MARTÍN NEIRA, Lilian, Estudios de Derecho Civil XVII, Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Villarica, 2023, p. 1175).

Pues bien, aceptando la distinción propuesta, en el presente juicio se identifican tres relaciones, una “relación de cuidado” y dos “relaciones de servicio”. La relación de cuidado entre el agente del daño y Luis Javier Cifuentes; las relaciones de servicios, entre Transportes CCU Limitada y la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda.(1); y la relación entre esta última y Luis Javier Cifuentes (2).

Relación de cuidado. La primera relación corresponde a aquella entre el agente del daño y Luis Javier Cifuentes, se da por establecida en mérito de los contratos de trabajo y de prestación de servicios, antecedentes que apreciados de conformidad a las normas de las presunciones judiciales del artículo 1712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento Civil, permite tener por acreditado que Erick David Esquivel Tapia, Alfredo Rivera Becerra y Jacob Andrés Osorio Torijano, prestaban servicios, en calidad de trabajadores - a favor del empresario transportista don Luis Javier Cifuentes Aguirre, los dos primeros desempeñándose como cargadores-repartidores y el tercero -señor Osorio Torijano- como chofer-repartidor. Además, se encuentra acreditado que la empresa de transportes Luis Javier Cifuentes Aguirre presta servicios como subcontratista para la Sociedad Logística del Norte Limitada, empresa que junto a Transportes CCU Limitada forma parte del grupo Romani.



Relaciones de servicio. Por lo que toca a las otras dos relaciones – de servicio-, la primera entre Transportes CCU Limitada y la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda.; y la segunda, entre esta última sociedad y Luis Javier Cifuentes. En estas dos relaciones no se da ni la subordinación, ni la dependencia, sin embargo sí se da una relación de servicios que, en las palabras de San Martín, se caracterizan por el hecho que el tercero, por sí o por intermedio de otro, encarga ciertas funciones al agente y la posibilidad de dirigir el curso de acción del tercero encargado.

Como ha quedado dicho, en este juicio, la empresa obligada a la prestación de transporte y reparto de mercaderías -Transportes CCU Limitada- decide no ejecutarla por sí, sino que opta por hacerlo, sirviéndose de un tercero auxiliar - Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda-; y esta empresa, a su vez, esta empresa procede de la misma forma, encargando dicha ejecución a Luis Javier Cifuentes. La prestación se ejecuta por intermedio de dos auxiliares, debiendo considerarse, además, un tercer auxiliar, el dependiente de Luis Javier Cifuentes.

Para dar por configurado el hecho base de la presunción del artículo 2320 de Código Civil, deberá considerarse que quien encarga la ejecución de una prestación –el transporte y reparto de la mercadería–su participación no se limita a la selección de auxiliar cerciorándose de su idoneidad técnica, sino que debe controlar la actividad de su auxiliar -mediante la adopción de las medidas que exige la diligencia debida – con el fin de prevenir y evitar el daño causado. Al no hacerlo -que es lo que la ley presume- se le asigna el riesgo de que el agente cause un daño a otro.

Una sentencia de esta Corte, de 27 de mayo de 2019, aplica el criterio de la posibilidad de control para dar por establecida la relación que exige el artículo 2320 y declara: “Que, así las cosas, el vínculo de dependencia como presupuesto de la responsabilidad en estudio no queda restringido a la existencia únicamente de una relación laboral típica, aceptándose un concepto más amplio y comprensivo de situaciones que las nuevas realidades sociales presentan, como lo demuestran las opiniones de la doctrina y casos de jurisprudencia referidos, de los que se desprenden otros criterios calificadores de este elemento, como la posibilidad de controlar la conducta del agente, de darle instrucciones en cuanto a la forma de realizar las labores o servicios, de fiscalizarlas y de la relación o



función que presentan dentro de la organización o empresa, elementos que deben ser analizados fácticamente en cada caso” (Rol N° 4.350-2018).

De todo lo dicho, esta Corte entiende que las sociedades demandadas, al encargar la ejecución de la prestación a un tercero, se ubicaron en una posición de control de la actividad de auxiliar que les exigía la adopción de las medidas destinadas a prevenir y evitar el daño y que, al no hacerlo, se entiende que asumieron el riesgo de que el dependiente de Luis Javier Cifuentes causara con culpa un daño a terceros.

**15°** Que, al quedar establecido el tercer requisito para aplicación de artículo 2320 del Código Civil, ha de darse por establecida culpa de los demandados por el hecho de tercero dependiente de Luis Javier Cifuentes.

La peculiaridad de este caso, es la aplicación de una presunción de culpa escalonada: la culpa de Transportes CCU Limitada; de la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda. y de Luis Javier Cifuentes.

Que, al no haberse alegado, ni acreditado, conforme el inciso final de artículo 2320 del Código Civil, haber observado la debida diligencia en la elección, control y vigilancia de sus auxiliares, esta Corte da por establecida la culpa de las demandadas.

**16°** Que, para hacer responsables a los demandados no resulta suficiente la presunción de culpa, sino que hace falta determinar sí, en este caso, se cumplen los restantes requisitos de la responsabilidad civil, a saber: (1) la existencia del daño cuya indemnización se reclama en este juicio; y (2) la causalidad, tanto respecto del agente del daño, como de los terceros demandados.

**17°** Por lo que toca al daño, las demandantes reclaman la indemnización de dos clases de daños, la del daño moral (a); y la del lucro cesante (b).

Los Demandantes, reclaman, a título de daño moral, por el sufrimiento padecido por la muerte de su padre Erick David Esquivel Tapia, la suma de \$100.000.000 para cada uno de ellos, de nombres Jhon Mayckol, Jonathan Ignacio y Erick Evaristo, todos de apellidos Esquivel Vásquez. Y, por concepto de lucro cesante, el demandante Erick Evaristo Esquivel Vásquez, reclama una indemnización por la suma de \$ 152.000.000.

**18°** En lo relativo al daño moral, convendrá comenzar considerando que el daño moral corresponde al menoscabo o lesión a un interés no patrimonial jurídicamente protegido o no contrario derecho, como lo es la integridad psíquica del individuo –protegida constitucionalmente–. Un menoscabo o lesión



proveniente de la acción u omisión imputable a dolo o culpa de otro. En las palabras de Domínguez Hidalgo, el daño moral está “constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una (persona) que se encontraba obligado a respetarlo” (DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen: “El daño moral”, Tomo I. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2001, p. 84). La noción de daño moral de Domínguez Hidalgo es amplia y no solo comprende el menoscabo a la integridad psíquica—, sino que toda otro menoscabo o lesión a otros intereses extrapatrimoniales que le dan contenido a la dimensión personalísima del individuo. El primero corresponde al “daño moral puro” y, el segundo, al “daño extrapatrimonial” que, como resulta evidente, comprende también el “daño moral puro”.

Tratándose del “daño moral puro”, deberá considerarse que no resulta suficiente cualquier molestia, dolor o padecer, se requiere que se trate de un menoscabo o lesión de carácter significativo. Si no satisface este estándar, no hay daño moral.

**19º** Que, en este juicio, se reclama la indemnización del “daño moral puro” y lo hacen en calidad de víctimas por repercusión o rebote por el sufrimiento y dolor provocado por la muerte de la víctima directa -su padre, imputable a la actuación ilícita de chofer Jacob Andrés Osorio Torijano.

Como en todo daño, no resulta suficiente alegarlo, sino que debe probarse en juicio, debiendo fijarse como hecho sustancial y controvertido que deberá probarse por la demandante que lo alega.

En lo que toca a la prueba del daño moral puro, es del caso considerar que para darlo por acreditado respecto de víctimas por repercusión o rebote, no resulta suficiente la existencia de una relación de parentesco con la víctima directa.

El actor deberá acreditar una estrecha e íntima relación de afectos con la víctima directa, el parentesco puede constituir un indicio, entre otros, para dar por establecida dicha relación, que la que permite al tribunal de fondo presumir la existencia de daño moral. Una estrecha e íntima relación de afectos que permita inducir inequívocamente que si otro sufre un daño o fallece a causa de un ilícito (víctima directa), dicho daño provocará una efectiva lesión de la integridad psíquica de quien pretende una indemnización.

**20º** En este juicio se da por establecida la existencia del daño moral no sólo por la relación de filiación de los demandados con la víctima directa,



acreditada por los certificados de matrimonio y nacimientos agregados a los autos, sino que además, por la edad de los actores al momento del deceso de su padre; la circunstancia que vivían con su padre; y la relación normal de afectos entre, en ese entonces, esos niños con su padre; relación que, salvo prueba en contrario –que no se rindió en este juicio– ha de darse por establecida.

Se trata de hechos que, al ser graves, precisos y concordantes, según lo exige el inciso tercero del artículo 1712 del Código Civil, permiten presumir judicialmente la existencia del daño moral –en tanto lesión a la integridad psíquica de los actores y el impacto en sus proyectos de vida–.

**21º** Que, al quedar establecida la existencia del daño moral padecido por los actores, queda por definir la cuantía de la indemnización.

Se trata de un daño que no admite valuación pecuniaria. Tal y como lo indica Barros Bourie: “Los daños morales, por el contrario, son inconmensurables en dinero, porque no existe un mercado para la vida, la salud o el honor, ni es legítimo poner a una persona en la situación de poner precio a esos bienes” (BARROS BORIE, Enrique, “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2020, p. 240)

Este carácter inconmensurable no puede ser un obstáculo para su indemnización, el artículo 2329 es claro al prescribir que “todo daño” debe ser indemnizado, sin distinguir su naturaleza. Sobre este punto, el mismo autor afirma que: “Sin embargo, se ha impuesto la idea que esta inconmensurabilidad no debe impedir su compensación, porque desde el punto de vista de la justicia correctiva y de la prevención, es preferible una indemnización basada prudencialmente en criterios precisos de valoración, que dejar daños no patrimoniales sin indemnización” BARROS BOURIE, Enrique, “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2020, p. 240)

El *quantum* de la indemnización de este daño -determinado prudencialmente- ha de alcanzar la finalidad satisfactoria, finalidad en la que subyace es que, ante el carácter irreparable, la suma objeto de la indemnización a favor de la víctima le permita acceder a medios materiales que le permitan, a lo menos, mitigar el daño moral.

En doctrina, Domínguez Hidalgo, al referirse a la finalidad de la indemnización de esta clase de daño, explica que “la calificación de ‘satisfactoria’ de la reparación por daño moral sólo es válida cuando con ella se pretende





expresar que la suma de dinero otorga a la víctima una satisfacción distinta a la que se obtiene cuando se busca resarcir un daño de orden económico.(...) la indemnización es un medio para que se procure alegrías o goces que le ‘compensen’ de algún modo tal lesión, y la satisfacción se logra, por tanto, por vía indirecta.”. (Domínguez Hidalgo, Carmen, El daño moral, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2000, p. 162). Por su parte, Alessandri afirma que la indemnización también: “puede ser compensatoria o satisfactoria y en el hecho lo es cuando el daño por su naturaleza es irremediable, (...) el dinero que el ofensor paga a la víctima no será la representación exacta del dolor que ésta experimente; pero le servirá para compensarlo, procurándole los medios de aliviarse de él...”. (Alessandri, Arturo, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 167)

La indemnización del daño moral ha de procurar a la víctima medios económicos que le permitan obtener, en las palabras de Domínguez Hidalgo, alegrías o goces que le ‘compensen’ de algún modo la lesión en que consiste esta clase de daño.

**22º** Que, como lo sostiene Barros Bourie, la evaluación prudencial de daño moral ha de servirse de “criterios precisos”. Entre tales criterios no solo se considera la “entidad” o “gravedad” de daño, sino que, entre otros, como la modificación de las condiciones de existencia del afectado con el daño producido, atendiendo su edad y condiciones físicas.

En este juicio, sí bien la entidad o gravedad de daño -la pérdida del padre- es la misma, al tratarse de víctimas menores de distintas edades -de 4, 9 y 16 años- que han crecido y desarrollado desde la muerte de su padre y crecerán y se desarrollarán desprovistos de la figura paterna, cuya ausencia que impactará en sus condiciones de existencia en niveles distintos según la edad de cada uno.

Al aplicar los criterios indicados, en especial, aquel relativo a la edad de las víctimas y, por lo mismo, el mayor impacto en las condiciones de su existencia como consecuencia de verse privado de su padre a tan temprana edad, esta Corte cuantifica prudencialmente la indemnización del daño moral padecido en la suma de \$60.000.000 a favor de Jonathan Ignacio Esquivel Vásquez; \$60.000.000. a favor de John Mayckol Esquivel Vásquez; y \$60.000.000. a favor de Erick Evaristo Esquivel Vásquez.

**23º** Que, en cuanto a la indemnización por lucro cesante solicitada habrá que comenzar considerando que ni la doctrina, ni esta Corte exige una



certidumbre exacta en orden a que, de no haber mediado el ilícito, la víctima habría percibido, hasta la edad de los 65 años, una determinada remuneración. Se trata de una partida de daños que por proyectarse al futuro, es imposible, a diferencia de lo sucede con el daño emergente, predicar una certidumbre exacta. Sin embargo, esta circunstancia no puede constituir un obstáculo insalvable para el resarcimiento de esta especie de daño.

Es por esta razón, que la doctrina nacional más autorizada –siguiendo las tendencias de derecho extranjero– y la opinión de esta Corte ha venido en subrogar, respecto de lucro cesante, el requisito de la certidumbre exacta y absoluta por la razonable probabilidad, dentro del curso normal de las cosas, de obtener o percibir la ganancia frustrada por el ilícito civil. Enfrentado a las probanzas rendidas en el juicio han de conducir a la conclusión que, de no haber mediado dicho ilícito, es razonable que el hecho futuro (la obtención de ganancias) habría sucedido porque así lo enseña el curso normal de las cosas.

En este sentido, es oportuno considerar la opinión de la doctrina nacional. En primer lugar, Barros Bourie, al referirse a la indemnización del lucro cesante, sostiene que: “(...) el objeto de la reparación es la expectativa objetiva de ingresos futuros que la persona lesionada tenía al momento del accidente y la indemnización debe comprender los ingresos netos que la víctima deja de percibir y su determinación se efectúa en concreto, atendiendo a las calidades de la víctima (incluidas su edad y su estado de salud). Así y todo, esta determinación supone asumir lo que habría de ocurrir en el futuro de no haber ocurrido el accidente, lo que exige una mirada objetiva hacia el curso ordinario de los acontecimientos” (BARROS BOURIE, Enrique: “Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2020, p. 289).

En segundo lugar, Elorriaga De Bonis entiende que “Nadie pone en duda que el lucro cesante para ser indemnizado debe ser cierto, pero esta certeza, por la naturaleza de este capítulo indemnizatorio, es de carácter relativo. No es posible exigir certeza absoluta allí donde no pueda haberla. (...) Por eso la idea que impera es que la certidumbre que es procedente en esta materia no es la absoluta, sino que la relativa y fundada en antecedentes objetivos. Sobre esta base, toda la doctrina moderna está conforme en que, para llegar a establecer la existencia y monto del lucro cesante, basta con un juicio de probabilidad, sin que este deba ser seguro, exacto o infalible. Hay que conformarse con consideraciones fundadas y razonables, dentro del proceso de la normalidad de las cosas y no aspirar a una



certeza que es simplemente imposible de encontrar en la especie. De lo contrario, ocurre que, en aras de la certeza, se sacrifica la reparación de un daño que es real y efectivo” (ELORRIAGA DE BONIS, Fabián: “Daño físico y lucro cesante”, en Derecho de daños. Santiago, Editorial Lexisnexis, 2002, p. 63). En fin, Peñailillo Arévalo indica que: “(...) una ganancia esperada nunca será absolutamente cierta; siempre existe la posibilidad de que algún sorpresivo obstáculo la malogre. Entonces, si se pide absoluta certeza, el lucro cesante no podrá ser indemnizado; pero acontece que —como se ha dicho— las normas legales ordenan su indemnizabilidad. Parece no haber otra alternativa de solución que la de moderar la exigencia de la certidumbre. Ha de pedirse, pues, un razonable grado de certeza, equivalente a una sólida probabilidad, que se traduce en una composición de los extremos y que se reflejará en la prueba”. (PEÑAILILLO ARÉVALO, Daniel: “Sobre el lucro cesante”, en: Revista en Derecho (Concepción), Vol. 86, N° 243, 2018, pp. 12 y 16).

Por su parte, está Corte al pronunciarse acerca de la procedencia de la indemnización de esta partida de daño, ha declarado que “(...) resulta erróneo exigir una certeza en cuanto a la existencia y extensión de este tipo de daño, pues por su naturaleza siempre poseerá, como acaba de indicarse, algún grado de incertidumbre” (Corte Suprema, 07 de mayo de 2024, rol N°13853-2022); y que “resulta evidente que, siempre la determinación de este rubro, al vincularse con un hecho futuro, genera incerteza, sin embargo, aquello no puede ser un obstáculo insalvable, pues su aceptación se vincula con la existencia de probanzas que conduzcan a concluir que es razonable aceptar que el hecho futuro habría tenido lugar” (Corte Suprema, 31 de enero de 2019, Rol N° 6317-2018). En cuanto a la existencia y prueba de lucro cesante, se ha indicado que esta partida indemnizatoria se funda en un juicio de probabilidades. Es el caso de la sentencia de 18 de marzo de 2024 que declara que “(...)la indemnización reparatoria del lucro cesante (...) se expresa como una diferencia entre dos momentos o estados, antes y después del daño, sujeto en este caso a una proyección objetivamente probable sobre la ganancia esperada en el evento de haber acontecido los hechos como se esperaba”. Agrega que labor del juez en la apreciación del lucro cesante se traduce en “(...) formular un juicio de probabilidad sobre la base de un ejercicio analítico de los antecedentes oportunamente acompañados al proceso (...)” (Corte Suprema, 18 de marzo de 2024, rol N°167492-2023). Y, en una sentencia de 13 de febrero de 2024, se menciona que “(...) la determinación de la extensión de la



reparación de este tipo de daño pasa por un ejercicio de prolongación cierta y directa del estado de cosas existente al momento del incumplimiento como si hubiera ello objetivamente podido ser medido en ese momento siguiendo un curso ordinario de las cosas, en atención al mérito de los datos probatorios rendidos en juicio” (Corte Suprema, 13 de febrero de 2024, rol N°83989-2023).

**24°** De las opiniones transcritas, esta Corte concluye que, tratándose del lucro cesante, la exigencia de la certidumbre debe apreciarse relativamente, siendo suficiente una razonable probabilidad de ganancias según el curso normal de las cosas y que este curso normal de las cosas supone una prolongación y mantención de las circunstancias existentes al momento del ilícito que deben ser debidamente acreditadas en el proceso. La determinación de ese curso normal exige prestar atención a la situación de la víctima antes del ilícito y sobre la base de elementos objetivos determinar, siempre con un grado de incertidumbre que envuelve la sombra de futuro, cuál habría sido la situación –en lo que a las ganancias se refiere– de la víctima que reclama la indemnización. En esta tarea, tal y como lo propone Barros, debe necesariamente considerarse las condiciones particulares de la víctima.

**25°** En este caso, el actor se limitó a solicitar la indemnización del lucro cesante, sin aportar ningún antecedente que permita a esta Corte determinar, dentro del curso normal de los acontecimientos, cuál habría sido la remuneración proyectada en futuro que permita concluir que dicha proyección constituye una “sólida probabilidad de ganancia”.

Siendo las cosas de esta manera, esta Corte rechazará la pretensión relativa a la indemnización del lucro cesante, precisamente, por falta de prueba.

**26°** Por lo que toca a la causalidad entre la conducta culpable del agente y el daño cuya indemnización se solicita por los demandantes, si se aplica cualquier criterio de causalidad fáctica y jurídica, resulta que la causa de la muerte del padre de los demandantes y, por lo mismo, del daño moral que se reclama, fue la conducta culpable del chofer. Se trata de un daño que puede imputarse al agente Jacob Andrés Osorio Torijano, razón por la cual ha de responder por el mismo.

Al darse por establecida la relación de causalidad, se dan por cumplidos los requisitos para hacer responsables a los demandados del daño causado por el dependiente.



**27°** Queda pendiente determinar si en este caso resulta aplicable la norma del inciso primero del artículo 2317 del Código Civil y, por lo mismo, la responsabilidad solidaria de los demandados. Habrá que recordar que los demandantes solicitan que sean condenados solidariamente o, en subsidio, de manera simplemente conjunta.

El citado inciso primero dispone que: “Si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones de los artículos 2323 y 2328”.

Una lectura del precepto transcrito indica que la regla de la responsabilidad solidaria exige, necesariamente, la unidad de hecho ilícito y la pluralidad de autores o agentes. Al comentar el precepto, Alessandri indica que: “Para que proceda la responsabilidad solidaria establecida por el art. 2317, es indispensable que un mismo y único delito o cuasidelito haya sido cometido por dos o más personas, es decir, que el hecho ilícito de donde deriva el daño sea ejecutado por dos o más personas, en otros términos, que haya pluralidad de sujetos, pero unidad de hecho. (...) Ello ocurre cuando varias personas se concertan para la ejecución de un delito o cuando, sin concertarse, lo ejecutan en común, como si un individuo que ve que otro está tratando de herir a un tercero sujeto a este para que aquel pueda lograr su propósito, o si el cuasidelito proviene de la culpa o negligencia de varios, como si un daño se produce porque dos personas encargadas de tomar ciertas medidas, las omitieron; dos vehículos que, al chocar a causa de que sus conductores infringieron los reglamentos del tránsito, hieren a un peatón”. (ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo: “De la responsabilidad extracontractual en el Derecho civil chileno”. Santiago, Imprenta Universitaria, 1943, pp. 486-489). Por su parte, Corral Talciani sostiene que: “(...) puede suceder que los agentes no sólo hayan puesto causas independientes del daño, sino que sean partícipes de la acción dañosa, cuya autoría puede considerarse plural. Existiendo, entonces, unidad de hecho y pluralidad de agentes responsables, procederá la responsabilidad solidaria que establece el art. 2317” (CORRAL TALCIANI, Hernán: “Lecciones de responsabilidad extracontractual”. Santiago, Editorial Jurídica, 2011, p. 200).

A lo sumo, la norma extiende su aplicación, como lo ha sugerido la doctrina y lo ha fallado esta Corte, a “hechos complejos” en los que, según Corral Talciani: “su estructura interna (del hecho ilícito), podemos distinguir



ilícitos simples e ilícitos complejos. (...) Los segundos (complejos), en cambio, se componen o se integran por un conjunto de comportamientos singulares, algunos iguales y otros de distinta naturaleza, que, en virtud de uno o más elementos jurídicos y materiales comunes que los vinculan, constituyen, según una valoración jurídica comprensiva, una sola conducta ilícita. (...) La relevancia de este tipo de actos radica en que, a pesar de concurrir varios hechos, configuran para todos los efectos civiles un solo acto ilícito, una sola conducta ilícita capaz de engendrar responsabilidad civil por el daño causado. Hay entonces pluralidad fáctica pero unidad jurídica” (CORRAL TALCIANI, Hernán: “La responsabilidad solidaria de los coautores de un ilícito extracontractual”, en: Lo Público y lo Privado en el Derecho. Santiago: Thomson Reuters, 2017, pp. 681-683). En fin, Barros Bourie, por su parte, sostiene que: “Según se ha analizado, puede darse por configurado *un mismo hecho* porque varios participan en una operación compleja, sea en la negligente construcción de un edificio, (...) o bien porque la producción del daño se debe a la participación simultánea de varias culpas (como cuando un atropello es consecuencia de un choque entre quien conduce a exceso de velocidad y quien ha ignorado una señal de preferencia). La ley consagra legalmente la solidaridad en casos en que se puede dar por establecido que el daño se ha producido por un mismo hecho en que participan dos o más agentes” (BARROS BOURIE, Enrique: “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2020, pp. 445-446). Una sentencia de esta Corte, de 31 de enero de 2018, al pronunciarse sobre la aplicación de la regla de la solidaridad del precepto legal del artículo 2317, declara que: “Como se aprecia, la regla de solidaridad en materia extracontractual prevista en la disposición recién citada resulta aplicable cuando el hecho culpable o doloso ha sido cometido por dos o más personas, esto es, cuando a la perpetración de un mismo hecho concurren dos o más copartícipes, evento en el cual puede perseguirse a cada uno por el total del perjuicio o daño producido. (...) Pues bien, en la especie ha quedado asentado que las conductas atribuidas a los demandados no sólo confluyen a un mismo resultado sino que son constitutivas de una misma infracción al deber general de cuidado al que estaban obligados, pues participan, aun en distintos momentos, de un mismo hecho cuya ocurrencia se desarrolló durante el nacimiento de la menor, causando el resultado dañoso que se encuentran en el imperativo de



reparar del modo que acertadamente determinan los jueces del fondo”. (Rol N° 9189/2017)

¿Puede, en este caso, afirmarse la unidad de hecho y la pluralidad de autores? La respuesta es que no. En el caso objeto del recurso existe un solo hecho ilícito y un único autor del daño; el hecho ilícito cometido por el chofer Jacob Andrés Osorio Torijano, que causa la muerte de los dos trabajadores. Otra cosa es que la ley presuma la culpa de las empresas demandadas y, por esa razón, resulten responsable por el hecho del chofer Jacob Andrés Osorio Torijano.

Al tratarse de conductas diversas – la culpa del chofer y la culpa presumida de las tres empresas- resulta inaplicable el inciso 1° del artículo 2317 y, por lo mismo, la responsabilidad solidaria de los demandados. La que, por lo mismo, deberá rechazarse.

**28°** Que, si bien no hay solidaridad, el artículo 2320 del Código Civil, en lo que toca a la responsabilidad que se le atribuye al tercero por su culpa presumida, se comporta como si se tratara de una responsabilidad solidaria. No lo es, sin embargo, la víctima –en este caso, los hijos del trabajador fallecido– tiene derecho a dirigirse, indistintamente, por el total de la indemnización en contra del agente del daño o el tercero civilmente responsable.

Así lo reconoce Barros al expresar, cumplidos los requisitos del artículo 2320, “(...) la víctima puede dirigir su acción indemnizatoria en contra del autor del daño o del guardián, cada uno de los cuales es responsable por su propio acto. Se trata de dos responsabilidades autónomas, de modo que no es necesario demandar al autor del daño en el juicio en que se persigue la responsabilidad del guardián”. Añade que: “Técnicamente no existe solidaridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2317, porque si bien concurren dos responsables, no se trata propiamente de un daño proveniente del mismo hecho. Sin embargo, hay acuerdo en que tratándose de obligaciones independientes, la víctima puede demandar la totalidad del daño respecto de cualquier responsable” (Barros Bourie, Enrique: “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago. Editorial Jurídica de Chile, 2020, pp. 185-186).

En este caso, al existir una presunción escalonada de culpa - que cubre los distintos eslabones de la cadena para la prestación del servicio de transporte y reparto-, el artículo 2320 del Código Civil permite a la víctima dirigirse indistintamente por el total no solo en contra de Jacob Andrés Osorio Torijano,



Transportes CCU Limitada, Luis Javier Cifuentes, Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Ltda.

Si bien resulta suficiente la aplicación del artículo 2320 del Código Civil para condenar indistintamente a los demandados por el total, en opinión de esta Corte, se arriba al mismo resultado, si se aplica el criterio de causalidad jurídica de la adecuación.

En las palabras de Barros, al referirse a la causalidad adecuada, “La doctrina de la causa adecuada recurre a la figura del observador informado que debe juzgar *ex post* cuáles daños no pertenecen al desarrollo normal de los acontecimientos. (...) para dar por establecida la causalidad adecuada basta que, miradas las cosas hacia atrás, se haya podido contar con la posibilidad de que el daño llegara a ocurrir. (BARROS BOURIE, Enrique: “Tratado de responsabilidad extracontractual”, Tomo I, segunda edición. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 423)

Pues bien, conforme con el criterio de la causalidad adecuada, al mirar las cosas para atrás, para cualquiera de los demandados era posible que el daño llegara a ocurrir.

Para cualquier observador externo razonable, en la posición de cualquiera de los las demandadas, era probable que, si elegía o seleccionaba mal a su subcontratista y/o no controlaba su actividad, adoptando las medidas que resultaban prudentes atendidas las circunstancias, podía producirse un daño a terceros.

De esta forma, al aplicar el artículo 2320 –que obliga al tercero - a los demandados- a la totalidad de la indemnización del daño causado por el agente sujeto a su cuidado o control–; y utilizar el criterio de la causalidad adecuada, resulta procedente atribuir responsabilidad a ambos demandados, condenándolos indistintamente, al pago del total de la indemnización del daño moral fijada.

Entonces, no hace falta utilizar ni la solidaridad, ni la figura de las obligaciones *in solidum* para condenar indistintamente a los demandados por el total de la indemnización, sin perjuicio del derecho de repetición reconocido por el artículo 2325 del Código Civil.

**29°** Que, los dineros que se ordenará pagar serán reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el índice de precios al consumidor, más los intereses desde la fecha que la sentencia se encuentre firme y ejecutoriada hasta el pago efectivo.





**30°** Que no se condenará en costas a los demandados.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, 44, 1698, 2314 y siguientes del Código Civil y 184 del Código del Trabajo **SE REVOCA** la sentencia en alzada de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve y, en su lugar se declara que **SE RECHAZA** la excepción de cosa juzgada y **SE ACOGE LA DEMANDA**, solo en cuanto se condena indistintamente a las demandadas Sociedad Transportes CCU Limitada y de la Sociedad Logísticas del Norte y Compañía Limitada a pagar a los demandantes Jhon Mayckol, Jonathan Ignacio y Erick Evaristo, todos de apellidos Esquivel Vásquez, por concepto de daño moral la suma de \$60.000.000.-(sesenta millones de pesos) a favor de Jonathan Ignacio Esquivel Vásquez; \$60.000.000. (sesenta millones de pesos) a favor de John Mayckol Esquivel Vásquez; y \$60.000.000. (sesenta millones de pesos) a favor de Erick Evaristo Esquivel Vásquez.

Se **previene** que el Abogado Integrante Sr. Vidal en atención a la diferente edad de las víctimas al momento del ilícito que causó la muerte de su padre, considera que el impacto en las condiciones de existencia de cada uno difiere, razón por la cual no resulta razonable concedérseles la misma suma de dinero a título de indemnización, precisamente, porque el daño que padeció cada uno no puede ser de la misma entidad. Por lo mismo, estuvo por conceder una indemnización distinta para cada uno de los demandantes. En concreto, la suma de \$ 60.000.000 a favor de Jonathan Ignacio Esquivel Vásquez de 4 años de edad; (2) la suma de \$55.000.000 a favor de John Mayckol Esquivel Vásquez de 9 años de edad; y (3) la suma de \$50.000.000 a favor de Erick Evaristo Esquivel Vásquez de 16 años de edad, más reajustes e intereses dispuestos en el motivo vigésimo noveno.

Acordada **con el voto en contra** de la Ministra Sra. Repetto quien estuvo por confirmar el fallo en alzada en base a las consideraciones expuestas en la disidencia de la sentencia de casación que antecede.

Regístrese y devuélvase

Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Álvaro Vidal, y la prevención y el voto de sus autores.

**Rol N° 154.546-2023.**

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros señor Juan Eduardo Fuentes B., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica



Repetto G., señora María Soledad Melo L. y el Abogado integrante señor Álvaro Vidal O. No obstante, haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, no firman el Ministro señor Fuentes B., por haber terminado sus funciones y el Abogado Integrante señor Vidal O., por estar ausente. Santiago, 03 de febrero de 2025.

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO  
MINISTRO  
Fecha: 03/02/2025 15:34:05

MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO  
GARCIA  
MINISTRA  
Fecha: 03/02/2025 15:34:05

MARIA SOLEDAD MELO LABRA  
MINISTRA  
Fecha: 03/02/2025 15:34:06



En Santiago, a tres de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

